

AGENDA DESIGUALDAD

Unas de las principales tareas que tenemos por delante es avanzar hacia una estrategia de **desarrollo inclusivo y sostenible**, que sea alternativo al neoliberalismo, lo cual debemos consagrar en el debate constitucional a través del reconocimiento de un “**Estado social de derechos**”, que nos ayude superar este mal endémico que tenemos como sociedad, que es la **desigualdad**. Este factor es una de las principales causas de fondo del descontento que explotó en el estallido social y que debemos tener presente para enfocar nuestra agenda. Para esto, debemos ponernos a pensar en reformas urgentes, que se puedan implementar en los dos años restantes del gobierno de Piñera que restan, además de generar una agenda a mediano y largo plazo para un futuro programa y gobierno de centro izquierda, de lo cual no podemos perder el foco.

En Chile, la **desigualdad es histórica**, como lo demuestra el estudio del 2018 del PNUD. Nuestro país en 30 años ha reducido el índice gini de 57,2 a 46,6, cifra que tenía Argentina en 1990. De esta forma, ocupamos el lugar 24 en desigualdad del mundo y el primero en la OCDE en materia de desigualdad. En nuestro sistema, exista poca transferencia monetaria por parte del Estado que influya en superar esta injusticia. Luego de impuestos y transferencias solo se reduce en 0,47, es decir, la influencia del Estado solo significa la disminución de un 0,4% en el índice, mientras que en Francia es más de un 40%. Esto ha llegado a afirmar que la desigualdad en el país es una decisión netamente política.¹

Esto comenzó a ahondarse en la implementación el sistema neoliberal en la dictadura, y que los gobiernos democráticos no han podido revertir. Para esto, debemos ir superando este modelo e implementar una real economía social de mercado, basado en la cooperación y en el consenso, modelo exitoso en Alemania y en los diversos países nórdicos.

¹ <https://ciperchile.cl/2019/12/10/parte-ii-la-desigualdad-es-una-decision-politica/>

Nuestra propuesta no debe olvidar que, para avanzar en esta agenda, debemos fortalecer la economía y mejorar el crecimiento, lo cual permite aumentar los ingresos fiscales y financiar programas sociales. Para esto es fundamental la inversión pública, basada en la infraestructura pública, con planes a largo plazo.

En los últimos 25 años se ha crecido en un promedio de 4,8%, cuadruplicado las exportaciones, lo cual ha incrementado el ingreso per cápita en 2.5 veces, disminuyendo drásticamente la pobreza, pero lo cual no se ha reflejado en un mejor bienestar a la comunidad. Sin embargo, en la última década hemos vivido una desaceleración que deja en evidencia los límites estructurales de la economía, la cual es conocida como “trampa del ingreso medio”. Los expertos han dicho que se debe a la falta de diversificación productiva, a la mantención del modelo extractivo de materias primas y explotación de recursos naturales sin incorporar mayor valor agregado a nuestros productos. Aquí falta inversión en Innovación y Desarrollo (I+D), la que alcanza a un 0,37% del PIB, que en los países desarrollados es de 2,3%, para lo cual se debe fortalecer una red descentralizada de centros científicos y tecnológicos, para impulsar, además, la modernización de los sectores tradicionales como la construcción y la industria manufacturera.

En cambio, la acumulación de riquezas se debe a la especulación financiera, lo cual no genera empleos ni desarrollo, creando un suprapoder, que influye directamente en la política y en las decisiones públicas más importantes.

Necesitamos un Estado potente que pueda proveer los derechos sociales más básicos, reemplazando la subsidiariedad amparada en la Constitución por un sistema basado en la solidaridad, en que debe existir plenamente que la generación de riquezas en el país es parte de un esfuerzo colectivo de trabajadores, empresarios, etc.

Pero el crecimiento solo es una condición necesaria, no suficiente para superar la pobreza, y menos para reducir desigualdades.

El sistema tributario debe ser una herramienta que funcione para redistribuir los ingresos. El impuesto a la renta, que es progresivo, juega un rol secundario frente al IVA. Debemos tener conciencia que el IVA es un impuesto regresivo, ya que los sectores más ricos ahorran más, por lo cual consumen menos, recayendo la recaudación del mismo en los sectores bajos y medios. Para esto es esencial ponerse a pensar una reforma a corto plazo para enfocarnos en los impuestos a la extracción de recursos naturales o royalties, ya que es justo que las empresas que obtengan utilidades por explotar nuestro suelo, tengan una mayor carga impositiva por la externalización negativa que producen. En materia minera, la reforma del 2010 dejó negociada la invariabilidad tributaria hasta 2025, pero de todas formas hoy se ha abierto la discusión del royalty en el área, en que debemos explorar alternativas, para también abrir la discusión a las actividades forestales, agrícolas, pesca, entre otras. En cuanto a los impuestos a los “super ricos”, en la reforma tributaria que discutimos hoy se aumentaron los impuestos a través de las viviendas, pero también debemos enfocarnos en las herencias, que son otra forma de recaudar ingresos de estos sectores.

Una vez que hemos hecho la reflexión acerca de donde sacamos ingresos, debemos discutir la agenda social según las prioridades de la ciudadanía, que en la última CEP se habla de: pensiones 64%, salud 46%, educación 38% y sueldos 27%. El estudio del PNUD que citamos, también nos dijo en el 2018 que las mayores molestias que padece la gente, es porque solo unos pocos en Chile acceden a un sistema de educación y salud de calidad, lo cual sigue dependiendo del bolsillo.

La agenda planteada por igualdad en materia laboral, propone nivelar hacia arriba con el aumento de los salarios, aumentando las remuneraciones para que en 2022 llegue a \$550.000 el sueldo mínimo, para lo que necesitamos subsidiar a las pymes, lo que permite a las familias estar sobre la línea de la pobreza. Debemos pensar que la razón de la desigualdad en los ingresos se da por la baja

productividad que tienen las empresas dependiendo de su tamaño, en que el Estado debe tener una política para mejorar la misma.

La derecha en materia laboral solo postula flexibilidad. En los países que son exitosos en desarrollo, la flexibilidad viene acompañada de un sistema potente de protección social, lo cual no ocurre en el país. Para esto, si el gobierno pretende hablar de esta materia, esto debe ir acompañado con mejoras sustanciales al seguro de cesantía, que no sea, tampoco, una sobre carga para el fisco, sino que provenga de los empleadores. Además, debe ser acompañada con una reflexión en torno a la precariedad laboral, teniendo presente que un tercio de los trabajadores se encuentra en informalidad, suma que duplica a los sectores más pobres

En la propuesta de igualdad olvidamos la necesidad de plantear una reforma que mejore las herramientas de **negociación colectiva** y que facilite la creación sindicatos. Estas organizaciones han sido esenciales para reducir la desigualdad en diversos países, pero aquí son marginales, ya que el Código del Trabajo crea trabas a su existencia favoreciendo consigo a los empleadores y, cuando se ha pretendido mejorarlas, la Constitución ha producido trabas a las reformas. Un ejemplo del déficit en el tema, es que ocupamos el último lugar en la OCDE de los trabajadores cubiertos por procesos de negociación colectiva. Para esto, tenemos pendiente aún implementar las negociaciones por rama y crear un Consejo Superior Laboral como un espacio de dialogo de las distintas organizaciones y que el dialogo sea parte esencial del nuevo modelo chileno.

En materia de **pensiones**, debemos hacernos cargo que un 70% de los jubilados recibe una jubilación menor al salario mínimo. Para esto, la agenda de igualdad plantea defender la propuesta de la oposición en la reforma del gobierno, de que el 6% de cotizaciones a cargo del empleador vayan a solidaridad, mejorando las pensiones actuales y futuras de los sectores más bajos, a través de un sistema de ahorro colectivo. Si bien, comparto esta propuesta que es urgente, nosotros, a mediano plazo, debemos hacer una propuesta sistémica, terminando con el monopolio de las AFP, dando un modelo base de solidaridad administrado

por el Estado, dejando las cuentas individuales para los puntos porcentuales de cotización que estén sobre los 400 mil pesos, como es la propuesta sostenida por la bancada de Senadores socialistas.

No debemos olvidarnos de la importancia de la **educación** en todo esto, ya que es un derecho social que ha permitido empujar a diversos países hacia el desarrollo. En nuestro gobierno, las reformas educacionales fueron la prioridad, comenzando con el proceso de desmunicipalización, el termino del negocio en la educación y la gratuidad de la educación superior a los sectores más bajos. Pero, aún dejamos pendiente el termino de exámenes estandarizados como la PSU, que es un tema presente. Ésta debe ser reemplazada por pruebas por Universidad que sean integradoras, como sucede en casi toda Latinoamérica, ya que es uno de las principales barreras de acceso a la Universidad a los sectores más pobres. Además, debemos seguir con la agenda de seguimiento a la implementación de la ley de nueva educación pública y que el gobierno ha puesto trabas. Esperamos que esto sirva para terminar con una de las más importantes brechas, como es la desigualdad en la calidad de la educación. Por último, se mantienen los déficits en materia de educación inicial y preescolar, lo cual influye en la trayectoria educativa, sobre todo, de los niños y niñas más pobres.

En **salud**, el gobierno no otorga soluciones, ya que su reforma lo que pretende realizar es isaprizar la salud pública, trasladando la atención hacia las clínicas. Por esto, es que aún por parte del oficialismo no se habla de un seguro único de salud, lo cual está bien planteado por igualdad. Todos los sectores de la sociedad deben ayudar a mejorar este sistema, lo cual hoy no ocurre si todas las cotizaciones de los sectores más acomodados van a los sistemas privados. El sistema publico sigue estando colapsado y el gobierno no es capaz de ofrecer propuestas que reviertan esto.

Debemos entender, que no hay desarrollo posible sin igualdad de género. La desigualdad de **género** se expresa en la economía, en el trabajo y en la política. Las mujeres seguimos teniendo menores remuneraciones e inserción laboral que los hombres. La tasa de participación laboral femenina rodea el 48%,

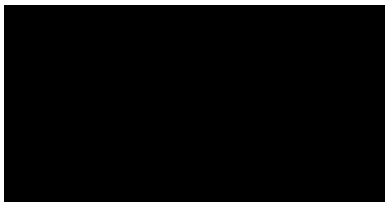
mientras que la OCDE es de 60%. A esto se suma la escasa representación en organismos, lo cual da a conocer la importancia de la paridad en la Convención Constitucional.

En la agenda social también debemos hacer propuestas para una agenda **anti abusos**. Piñera presentó hace un mes sus ideas, pero aún no ingresa nada concreto al Congreso. Han surgido materias, que van acompañada de impulsar mejoras al sistema de persecución penal contra los delitos de cuello y corbata.

El nuevo modelo económico debe ser armónico con la naturaleza y el **medio ambiente**. Por esto debemos incrementar la existencia de energías renovables no convencionales, para responder al reto de la escasez hídrica y que se reduzca el proceso de desertificación que existe.

Otro punto que podemos enfocar es en las ciudades, ya que la desigualdad se manifiesta en las diferencias existentes entre comunas de alto y las de bajo ingresos. Como también, las que existen entre Santiago y regiones.

Por último, todo esto incide en un sistema cultural que naturaliza la discriminación, el clasismo, generando tratos denigrantes. Por esto, no debemos olvidar como objetivo del socialismo, avanzar hacia el otorgamiento de mayores libertades personales a los ciudadanos, para lo cual seguir promoviendo debemos los derechos de las mujeres, como un deber del Estado, el matrimonio igualitario, entre otros.



**INDICACION AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE
MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL, PARA PERMITIR LA
CONFORMACIÓN DE PACTOS ELECTORALES DE INDEPENDIENTES Y
GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS PARA LA
INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO CONSTITUYENTE QUE SE CONFORME PARA
LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA. (BOLETÍN Nº 13.130-07)**

Reemplázase en el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República, en la disposición transitoria vigésima novena nueva el número 2.-, por dos disposiciones transitorias nuevas: trigésima y trigésima primera, del siguiente tenor:

TRIGESIMA. – De la declaración de candidaturas para la Convención en equilibrio de género.

En el caso de las declaraciones de candidaturas para la elección de convencionales constituyentes, la lista de un partido político, pactos electorales de partidos políticos o pactos electorales celebrados entre candidaturas independientes, deberán señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en la cédula para cada distrito electoral, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con hombres.

En cada distrito electoral, las listas integradas por un número par de candidaturas, deberán tener el mismo número de mujeres y de hombres. Si el total de postulantes fuera impar, un sexo no podrá superar al otro en más de uno. No será aplicable lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4 de la ley Nº 18.700.

En los distritos que escojan tres a cuatro escaños, las listas podrán declarar hasta seis candidaturas a convencionales constituyentes, siguiendo los incisos anteriores, no aplicando al respecto lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, el cual regirá para el resto de los distritos que escojan cinco o más escaños.

La infracción a cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas en el distrito por el respectivo partido político o por el pacto electoral de candidaturas independientes.

TRIGESIMA PRIMERA. - Del equilibrio entre mujeres y hombres en la elección de convencionales constituyentes.

Para la distribución y asignación de escaños de los convencionales constituyentes se seguirán las siguientes reglas:

1.- El sistema electoral para la Convención Constituyente se orientará a conseguir una representación equitativa entre hombres y mujeres. Con este objetivo, en los distritos que reparten un número par de escaños, deban resultar electos igual número de hombres y mujeres, mientras que en los distritos que reparten un número impar de escaños, no podrán resultar electos una diferencia de escaños superior a uno, entre hombres y mujeres.

2.- Se asignarán los escaños preliminarmente que correspondan aplicando el artículo 121, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, según lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 141 de la Constitución.

3.- En caso que la asignación preliminar se ajuste a lo señalado en el numeral 1, se proclamará constituyentes electos a dichas candidatas y candidatos.

4. Si en la asignación preliminar de constituyentes electos en un distrito resulta una proporción, entre los distintos sexos, distinta a la señalada en el numeral 1, se procederá a una reasignación de la siguiente forma:

a.- Se determinará la cantidad de hombres y mujeres que deban aumentar y disminuir, respectivamente, en el distrito, para obtener la distribución mínima indicada en el numeral 1.

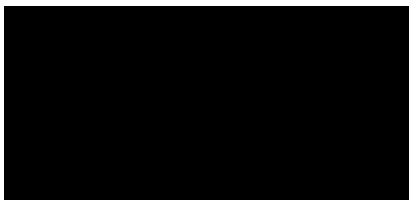
b.- Se ordenarán las candidaturas asignadas preliminarmente del sexo sobrerrepresentado según su votación individual de menor a mayor.

c.- La reasignación se realizará reemplazando una de las candidaturas asignadas preliminarmente de menor votación del sexo sobrerrepresentado, por la candidatura del sexo subrepresentado con mayor votación del mismo partido, salvo en la lista de independiente, y que no se le haya asignado el escaño preliminarmente. Si no se lograre con esto el equilibrio de genero, se reemplazará a la candidatura del sexo sobrerrepresentado que continúe en la nomina de la letra b, y así sucesivamente.

En caso que no pudiese mantener el escaño en el mismo partido, se proclamará al candidato o candidata del sexo subrepresentado más votado de la misma lista o pacto.

En ningún caso procederá reasignación alguna respecto de los ciudadanos independientes que resulten electos fuera de lista. Sin embargo, éstos se considerarán con el objeto de establecer el cumplimiento de la paridad o diferencia mínima entre sexos.

Para el caso en que la ciudadanía elija la opción de Convención Mixta Constituyente en el plebiscito nacional del domingo 26 de abril del año 2020, serán aplicables las normas de la presente disposición transitoria para la elección todos los miembros de dicha convención constitucional.



Minuta Acusación Constitucional a Intendente Guevara

La acusación tiene por fundamento la infracción que habría cometido el Intendente por la estrategia de copamiento preventivo de Carabineros que se realizó en Plaza Italia en el mes de diciembre de 2019. Dicha estrategia habría infringido el derecho a la reunión y a la libre expresión de la ciudadanía, con lo cual infringe la Constitución.

La Constitución en el artículo 52, numeral 2, letra e), señala que los Intendentes podrán ser acusados constitucionalmente por infracción a la Constitución

I. HECHOS

El 30 de octubre de 2019, Felipe Guevara fue nombrado como Intendente de la Región Metropolitana.

Antes de asumir, las manifestaciones en Plaza Italia habrían tenido una gran asistencia, llegando a más del millón de personas, lo cual se repetía todas las semanas.

El 13 de diciembre se realizó un evento masivo con importantes bandas musicales locales. En ese entonces, el Intendente expresó que, si en esa concentración comienzan a realizarse disturbios, Carabineros procedería a la disuasión de dicha reunión.

La estrategia de copamiento policial comenzó a expresarse por la autoridad regional el 17 de diciembre, denominándola como una estrategia de “Tolerancia 0” frente a manifestaciones no autorizadas, para lo cual optó por “copar” Plaza Italia con 1.000 efectivos de Carabineros, realizando controles preventivos de identidad a los asistentes. Dicho plan solo trajo más violencia, como fue el atropello de un joven de 20 años, Oscar Pérez, por parte de un carro Lanzagases. Pese a esto, la autoridad regional justificó el actuar de Carabineros como “adecuado”, siendo respaldado por el Ministro del Interior.

El viernes posterior, el día 27, terminó con un incendio en el Cine Arte Alameda, producto, supuestamente, de una bomba lacrimógena de Carabineros. Ese día también murió un manifestante al caerse en un foso al escapar de la represión de la policía.

Luego de los incidentes y dada la grave violencia que fue causada por esta estrategia, el Intendente intentó desligarse de la responsabilidad, afirmando que los operativos policiales son de exclusiva prerrogativa de Carabineros, quienes habrían decidido la estrategia de copamiento.

II. Derecho.

La acusación se basa en que habrían sido vulnerados el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, regulado en el artículo 19 N° 11 y el derecho a emitir opinión o libertad de expresión 19N° 13, ambos de la Constitución. De estos se desprende el derecho a la protesta social.

El derecho a la libertad de expresión es el derecho a opinar, divulgar su pensamiento, propagar información veraz, etc., sin censura previa.

El derecho a reunión es garantizado en la Constitución si es pacífico, no exigiendo permiso previo, debiendo realizarse sin armas. Ese mismo numeral 13¹ que regula este derecho, señala que las reuniones en plazas, calles y demás lugares públicos, se regirán por las “disposiciones generales de policía”.

De lo anterior, desprenden los acusadores, este derecho no puede ser restringido, supeditándolo a una autorización y permiso previo. Según dicho razonamiento, el mismo solo puede ser regulado por una ley, pero que en nuestro ordenamiento solo es normado por un decreto supremo, lo cual es inconstitucional. El mismo razonamiento, existe en el pacto San José de Costa Rica. Por esto, la

¹ 13°.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía.

expresión “disposiciones generales de policía”, hace que nuestro Estado no cumpla con las obligaciones internacionales.

Por esto, concluyen, que el sistema de “copamiento preventivo” implementado por Guevara, se enmarca en actuaciones del Intendente, en que abusivamente se aprovecha de las condiciones regulatorias precarias del derecho a reunión, infringiendo, con ello, las normas constitucionales, al no respetar la supremacía constitucional que consagra el derecho a reunión sin permiso previo.

Por lo anterior, es que se acusa una infracción al principio de proporcionalidad, ya que el medio de copamiento no es el idóneo ni efectivo para mantener el orden público, como quedó demostrado en ese entonces, lo cual solo trajo mayor violencia.

III. Opiniones a favor.

Los profesores constitucionalistas, Domingo Lovera y Christian Viera, afirmaron la existencia de antecedentes para afirmar la acusación.

Lovera define la protesta social como la facultad de un grupo de personas de presentar reclamos contra hegemónicos. Éste manifiesta que Guevara habría infringido la Constitución al sujetar el derecho a reunión a autorizaciones. Esto por cuanto, la Constitución garantiza el derecho a reunión sin permiso previo, lo cual gatilla una obligación negativa del Estado que no puede interferir en ese derecho, lo cual fue ratificado por la Corte Suprema en 2014, que señaló que estos derechos no permiten censura previa ni requiere permiso anticipado por parte de la autoridad.

¿Cómo entender la expresión “disposiciones generales de policía”? Como regulaciones que permiten la coordinación de diferentes derechos en juego, no para eliminar el ejercicio de uno de ellos. En el derecho comparado, el derecho a reunión se regula por un sistema de notificaciones a la autoridad, no de autorizaciones.

Afirma, que el decreto que reglamenta la “autorización” de la protesta es inconstitucional, por afectar la esencia del derecho a reunión.

Viera, agrega que la autoridad solo puede disolver reuniones en lugares públicos, pero solo cuando haya un riesgo real e inminente al orden público, por lo cual una estrategia de copamiento preventivo es solo una conjetura y presunción que infringe los derechos constitucionales.

Iv. Argumentos en contra.

1. Hechos no son imputables a Guevara.

La defensa señala que la estrategia no fue decisión del Intendente, al carecer de atribuciones legales, técnicas y operativa para definir estas estrategias policiales. Esto, porque si bien el Intendente tiene atribuciones relativas a gobierno interior para velar por el orden público, las orientaciones provienen del Presidente o del Ministro del Interior, no teniendo, además, facultades de mando respecto a las policías, lo cual recae en el Ministro del Interior.

2. Autonomía operativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Según la LOC de Carabineros, estas policías tienen independencia operativa y son de carácter profesional. Por esto, ellos determinan la distribución de personal y medios. El Intendente, en esto, solo debe coordinarse con Carabineros, sin afectar su independencia. Es así como las estrategias policiales son reflejo de dicha autonomía.

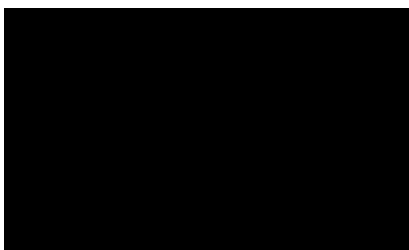
3. Uso abusivo de la acusación

Los acusadores intentarían realizar una interpretación abusiva, ya que la causal exige que se señale expresamente una regla que se infringió, no bastando invocar principios, como lo señala el libelo acusatorio.

4. No se ha vulnerado el derecho a reunión.

El Intendente solo ha dado cumplimiento a la legislación vigente, como los anteriores Intendentes que también han hecho uso de la facultad de no autorizar marchas.

Además, señala que las estrategias de Carabineros son medidas necesarias y proporcionales frente a los graves y reiterados desorden y desmanes que se han producido.



Minuta Ley Gabriela

I. Antecedentes

1. Introducción.

El concepto de femicidio se le atribuye a Diana Russel en 1976, quien define: “el asesinato de mujeres por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad sobre las mujeres”. Mientras que Patsili Toledo Vasquez señala: “un concepto que surge con una intención política: develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes, que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato”

Según ONU mujeres, en 2017, el 35% de ellas reveló haber sido violentada física o sexualmente alguna vez en la vida. Mientras que en Chile, en la década de 2007 a 2017, se produjeron 489 femicidios, mientras el 2018 hubo 58 y en 2019 se registran 49.¹ Otro dato, es que un 76% de las víctimas de VIF son mujeres, mientras de que del total de los homicidios, aproximadamente el 90% es realizado por hombres.

Hasta 2018, al menos 16 países latinoamericanos han incorporado el delito de femicidio.

2. Regulación actual.

La ley N° 20.480 de 2010 creó el delito de femicidio. Dicha ley partió por una moción en la cámara, creando una figura de femicidio dentro del artículo 390 que contempla el delito de parricidio que sanciona a quien: “conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente.” La moción, creaba un inciso segundo en dicho artículo, sancionando como femicida: “el que,

¹ <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/femicidio-ano-2015/>

conociendo las relaciones que los ligan, mate a la mujer con la que esté o haya estado ligado como cónyuge, conviviente **o a través de cualquiera otra relación afectiva.**”

Finalmente, la ley fue dictada sin la relación afectiva, siendo la relación “haber sido la cónyuge o la conviviente de su autor.”

La crítica a dicha ley es que finalmente en nuestra legislación, el femicidio solo es una modalidad del parricidio cuando la víctima sea mujer, lo cual no releva la importancia de sancionar este tipo de conductas. La otra crítica, es que finalmente otro tipo de relaciones afectivas quedaron descartadas, no encontrándose el pololeo regulado.

Esta última crítica es la que llevó a que la familia de Gabriela Alcaino, quien fuera asesinada en agosto de 2018 por su pololo junto a su madre en Maipú, presentará esta moción para que se incorporara de forma íntegra el femicidio.

De acuerdo a la legislación comparada, se divide el femicidio en tres:

- a) El **femicidio íntimo** que corresponde a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar o afectiva.
- b) El **femicidio no íntimo** que es el asesinato cometido por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares o afectivas y que, frecuentemente, involucran un ataque sexual previo.
- c) El **femicidio por conexión** que hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas ‘en la línea de fuego’ de un hombre tratando de matar a una mujer, que es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida.²

² Moción Ley Gabriela.

II. Ley Gabriela.

a. Femicidio íntimo (390 bis)

Artículo 390 bis.- El hombre que mate a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

La misma pena se impondrá al hombre que mate a una mujer por razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

Hasta hoy, solo se sancionaba como femicidio al hombre que diere muerte a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente. El proyecto lo amplía con quien tiene o ha tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común. El cambio fue que se plantea en dos incisos.

La ampliación al pololeo era el principal motivo de la moción, ya que la adolescente Gabriela Alcaino fue muerta por su pololo, quien será sancionado solo por homicidio, con una pena menor a la del femicidio.

El femicidio íntimo será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo (15 años 1 día) a presidio perpetuo calificado (sin beneficios hasta 40 años de condena).

Esta figura puede recibir cuestionamientos de constitucionalidad, ya que la muerte de un hombre en una relación de pololeo no está contemplada, pero se hizo a propósito para que el femicidio tenga un mayor alcance- Al efecto, fiscalía argumentó: “establecer un tipo penal diferenciado según el sexo o el género de la víctima no vulnera el principio de igualdad, habida cuenta de la desigualdad estructural que las mujeres enfrentan en la sociedad, lo que queda de manifiesto al

constatar los rasgos de nuestro ordenamiento jurídico que tienden a perpetuar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.”. Mismo argumento fue expuesto por el constitucionalista Patricio Zapata. Pese a esto la derecha puede insistir acusando incoherencia del proyecto.

b. Tipo penal- Femicidio No intimo o por razones de género (art. 390 ter).

Recoge el acto de matar a una mujeres por el solo hecho de su pertenencia a ese género, con características misóginas, sin considerar relaciones de pareja.³

El nuevo delito sanciona la muerte de una mujer por un hombre **por razón de su género**, de la siguiente forma: “Quien mate a una mujer en razón de su género será autor del delito de femicidio, que se sancionará con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.”, también parte de los 15 años y 1 día la pena, pero termina en perpetuo, pudiendo optar a beneficios a los 20 años.

Para definir que entendemos por razón de género, se optó, adoptar el modelo de la ley tipo de femicidio de la OEA y el modelo mexicano que entrega circunstancias que orientan al operador jurídico, lo cual fue apoyado en la Comisión por los profesores Matus, Maria Elena Santibañez y Zaliasnik las cuales son:

“1.-Por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual.” Es una represalia del hombre, porque la mujer no se sometió a sus peticiones.

“2.-La muerte sea consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual.” Con esta

³ Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), OACNUDH – ONU

redacción queda claro que la muerte sea por esta razón y no solo por tener ese oficio.

“3.- Cuando el delito se cometa tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis.”

Según ONU-mujeres es el conocido como femicidio sexual, que es la muerte de mujeres, que son previamente víctimas sexuales.

La violencia sexual previa sería los casos de abusos con violencia o intimidación, ya que las violaciones tiene un tipo penal propio.

“x.- Cuando la víctima haya querido evitar la muerte o agresión de otra mujer, ya sea interponiéndose entre ella y el agresor, protegiéndola, pidiendo auxilio o de otra forma.”

Es el conocido “por conexión”, lo cual se eliminó ya que no siempre cabe dentro de la razón de género.

“4.- Se haya realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.”

Es el transfóbico, en caso de una mujer transexual o lesbofóbico. Es la expresión de un delito de odio.

“5.- Ocurra cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.”

Esta es una calificante de apertura, donde, a nivel jurisdiccional podrán incorporarse femicidios que tengan detrás un contexto de violencia u odio de género. Se basa en la definición de la ley modelo de femicidio de la OEA.

¿Por qué no hay presunción de dolo?

Las circunstancias solo son orientadoras de cuándo no enfrentamos a un asesinato por “razón de género”, las cuales se deben demostrar, exigiendo, las mismas, un dolo especial para configurarse.

c. Circunstancias agravantes responsabilidad penal. (390 quater)

Se crearon figuras agravantes que aumentan la pena de los condenados por este delito:

Artículo 390 quáter.- Son circunstancias agravantes de responsabilidad penal para el delito de este párrafo, las siguientes:

1. La víctima se encuentre embarazada.

Antes era una circunstancia calificante del delito.

2. La víctima fuera una niña o una adolescente menor de dieciocho años de edad, una mujer adulta mayor o una mujer en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.422,

3. Cuando se haya dado muerte a la víctima en presencia de sus ascendientes o descendientes.

4. Cuando fuere perpetrado en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima.

d. Atenuantes

En estos delitos no se podrá invocar la atenuante del artículo 11 n° 5, es decir, “5.º La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebatos y obcecación.”

Es una recomendación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do para, que señala: “Que la atenuante de “emoción violenta” no sea utilizada para disminuir la responsabilidad de los autores de femicidio.”

En Chile, ha habido casos que se ha disminuido la pena a femicidas por cometerse el delito por este arrebató, producto de una infidelidad.

e. Adecuaciones formales.

En el Código Penal, el Código Procesal Penal y en la ley 18.216 que regula las penas sustitutivas, se realizan adecuaciones formales, debido a que el femicidio se traslada del artículo 390 actual del CP al 390 bis y 390 ter, por lo cual hay que incorporar en diversas normas dichas modificaciones.

i. Código procesal penal.

- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. (132 bis)
- Apelación prisión preventiva. (149) En los delitos más graves, cuando el juez de garantía determine la libertad del imputado, este no podrá obtenerla hasta que se resuelva la apelación. Con la modificación se incluye los femicidios.

ii. Ley 18216. Que regula las penas sustitutivas de la pena.

Se incluyen los femicidios para que no procedan las penas sustitutivas para los autores de este delito.

III. INDICACIONES CHV.

1. FEMICIDIO INTIMO

UDI y RN presentaron indicaciones para que el femicidio íntimo tenga su “espejo” en el delito de parricidio cuando el hombre sea la víctima, lo cual debe rechazarse ya que no hay problema de constitucionalidad como se desarrolla en la otra minuta

2. FEMICIDIO INTIMO

Indicaciones derecha dejan el delito sin circunstancias, hablando solo como la muerte por “razón de género” o “desvalorización de género”, lo cual lo deja sin aplicación.

3. Razón de género en víctima hombre.

ChV propuso el 390 quinquies para incorporar la muerte de una persona por razón de género, ampliando a víctimas hombres. Lo mismo escapa de las ideas matrices del proyecto, ya que se trata acá de sancionar los femicidios, no muerte de hombres u otro tipo de delitos de odio.

Además, en derecho comparado la “razón de género” se han entendido los femicidios, no los “androcidios” o muerte de hombres por su razón de género.



PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES PARA OBLIGAR LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS CORTAFUEGO.

La existencia de muros cortafuego no se encuentra regulado ni definido en la ley, lo cual solo se contempla en la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

En dicha Ordenanza solo se establece la obligación de construcción de este muro para las edificaciones que se destinen a: Sanatorios y hospitales, teatros y locales de reunión, estacionamientos, centros de reparación automotor y caballerizas y establos. Mientras que el resto de los edificios solo deberán cumplir con las normas mínimas contra incendios.

Teniendo presente lo anterior, es que existe un vacío legal para el caso de los predios rústicos o parcelas, lo cual es un grave riesgo para la propagación de incendios, considerando las altas temperaturas que se han registrado en los últimos años debido al cambio climático.

En particular, la ciudad de Valparaíso ha sufrido en reiteradas ocasiones de incendios. Algunos de estos episodios han surgido de predios que no poseen muros cortafuego, lo cual ha significado que el fuego se haya expandido a viviendas, causando graves daños a decenas de familias.

El Ministerio de Obras Públicas se ha comprometido a construir cortafuegos para impedir la propagación del fuego de arrastre. Pero aún no existe una obligación de construcción de los mismos, lo cual es fundamental para prevenir esto.

De todas maneras, hay que tener presente que se necesitarán de fondos especiales por parte del ejecutivo para financiar subsidios a la construcción de estos muros en el caso de los dueños que no cuenten con recursos económicos para el mismo y puedan cumplir con lo dispuesto en la moción.

Por esto, es que el presente proyecto de ley viene a crear la obligación en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de que los propietarios de predios rústicos tengan la obligación de construir dichos muros.

PROYECTO DE LEY

Para agregar un nuevo artículo 56° bis a la Ley General de Urbanismo y Construcciones:

"Artículo 56° bis. En las áreas rurales, los predios rústicos deberán construir muros cortafuegos para la separación con las propiedades vecinas, que cumplan con el tiempo mínimo de resistencia al fuego requerido según el caso, lo cual se regulará por la Ordenanza General de la presente ley."

ISABEL ALLENDE BUSSI

H. SENADORA

